 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE BOYACÁ	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ</b> NIT. 891800721-8		Página	Página 1 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

**RESOLUCIÓN No. 447**  
**(10 de diciembre de 2025)**

*“Por la cual se surte Grado de Consulta dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal de radicado No 051-2021 / MUNICIPIO DE GÁMEZA - BOYACÁ”*

**EL CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ**

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 272 de la Constitución Política, Leyes 42 de 1993, 1437 de 2011, 2080 de 2021, 1474 de 2011, 330 de 1996 y 610 del 2000, Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de 2007.


**CONSIDERANDO**

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, el Contralor General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para este tipo de procesos, y al ser objeto de consulta el Auto No. 682 del 06 de noviembre de 2025, **“POR EL CUAL SE ORDENA ARCHIVO POR NO MÉRITO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 051-2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE GÁMEZA - BOYACA”**, es competente para conocer del mismo.

<b>PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO.</b> C.C No. 4.122.998 <b>Cargo:</b> alcalde municipal de Gámeza 2016-2019. <b>Dirección:</b> Calle 3ª # 3 – 26 Gámeza – Boyacá. <b>Correo:</b> edgar0103cris@hotmail.com <b>Teléfono:</b> 3203824557</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>ONG FUNDACIÓN BIENESTAR PARA COLOMBIA.</b> NIT N.º 900646412-9. Representante legal: <b>MONICA ANDREA ECHEVERRY RIOS</b> - C.C No. 30.403.385 de Manizales <b>Cargo:</b> Contratista dentro del contrato MG-SAMC-007-2019 <b>Dirección:</b> Cra 11 # 14 -14 oficina 127 - Sogamoso – Boyacá. <b>Correo:</b> colombia@gmail.com <b>Teléfono:</b> 3132443593</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>LUIS ANTONIO SERRANO RINCÓN.</b> C.C No. 9.527.834 <b>Cargo:</b> secretario de planeación municipal de Gámeza y supervisor del contrato MG-SAMC-007-2019</li></ul>

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	Maria Valeria Avila Herrera	REVISÓ	Cesar David Buitrago Velandia	APROBÓ	Juan Pablo Camargo Gómez
CARGO	Supernumerario	CARGO	Asesor del Despacho	CARGO	Contralor General de Boyacá



 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE BOYACÁ	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ</b> NIT. 891800721-8		Página	Página 2 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

	<b>Dirección:</b> Calle 5 # 16 -33 barrio Rosario en Sogamoso - Boyacá <b>Correo:</b> laseringcivil@yahoo.es.com <b>Teléfono:</b> 3118338455
<b>TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE</b>	<b>COMPANÍA ASEG:</b> ASEGURADORA LA PRESVISORA S.A. NIT. 860.002.400-2 <b>TIPO DE PÓLIZA:</b> Póliza de manejo global No: 3001720 <b>VIGENCIA:</b> Desde 30/03/2019 hasta 10/02/2020 <b>VALOR ASEGURADO:</b> \$10.000.000
<b>PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL:</b>	<b>CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$112.444.393) M/CTE.</b>

**HECHOS**


Por medio de denuncia ciudadana radicada en esta entidad el día 26 de octubre de 2020 con radicado N.º D-20-079 (Folios 1-5), el señor Diego Fernando Peláez mediante correo electrónico puso en conocimiento a este ente de control presuntas irregularidades en la ejecución del contrato MG-SAMC-007-2019 (Folios 18-32), cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES (CENTRO DÍA) DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA"* celebrado entre el Municipio de Gámeza y la ONG Fundación Bienestar Para Colombia por la suma inicial de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$223.995.000) con un adicional de OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$86.498.920).

En su denuncia informa que para la época del contrato el municipio cuenta con 268 personas plenamente identificadas para recibir la atención en el centro vida y el contrato en mención plantea una cobertura de mayor cantidad de personas a las pertenecientes al programa.

La Secretaría General mediante Auto N.º 073 del 27 de abril de 2021 (Folios 40-49) determinó un alcance fiscal por valor de **CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$112.444.393) M/CTE**, basado en la presunta gestión fiscal inadecuada e ineficiente respecto a la ejecución del contrato MG-SAMC-007-2019, resultando como entidad afectada el Municipio de Gámeza.

Se estableció una presunta responsabilidad en cabeza de: **EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.998, quien se desempeñó como alcalde del Municipio de Gámeza durante el



 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE BOYACÁ	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ</b> NIT. 891800721-8		Página	Página 3 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

periodo de 2016 – 2019, **ONG FUNDACIÓN BIENESTAR PARA COLOMBIA**, identificada con NIT N.º 900646412-9, representada legalmente por MONICA ANDREA ECHEVERRY RIOS identificada con cédula de ciudadanía No. 30.403.385 de Manizales, en calidad de contratista dentro del contrato MG-SAMC-007-2019, **LUIS ANTONIO SERRANO RINCÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. 9.527.834, en calidad de secretario de planeación municipal de Gámeza y supervisor del contrato MG-SAMC-007-2019.

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante Auto No. 284 del 27 de mayo de 2021 (Folios 54-62) avoca conocimiento y ordena la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 051-2021, adelantado ante el Municipio de Gámeza-Boyacá.

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, mediante Auto No. 682 del 06 de noviembre de 2025 (Folios 251-280), ordenó el Archivo del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 051-2021.

Con oficio D.O.R.F 787 del 10 de noviembre de 2025 (Folio 283), remite al Despacho del Contralor General de Boyacá, AUTO DE ARCHIVO, del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 051-2021, mediante Auto No. 682 del del 06 de noviembre de 2025, a fin de surtir Grado De Consulta conforme a los presupuestos del artículo 18 de la Ley 610 del 2000.

**PROVIDENCIA CONSULTADA**

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá a través de Auto No. 682 del del 06 de noviembre de 2025, entre otras cosas decidió:


***"ARTICULO PRIMERO.** - Ordenar el Archivo del proceso de responsabilidad fiscal N° 051-2021 adelantado ante el Municipio de Gámeza-Boyacá, por no encontrar mérito para continuar con el trámite del proceso de responsabilidad fiscal en mención, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 610 de 2000, y lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia fiscal."*

**CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURÍDICAS**

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República de Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus autoridades públicas se rigen con fundamento en normas jurídicas, siendo la Constitución Política la más importante; la connotación de social dada al Estado de derecho significa que el deber ser de las autoridades del Estado es la materialización de los derechos de los ciudadanos, especialmente los fundamentales, y la prevalencia del interés general.

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que existieran órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, examinar, investigar y castigar la conducta de los servidores públicos y en determinados casos de



 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE BOYACÁ	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ</b> NIT. 891800721-8		Página	Página 4 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

particulares que ejercen funciones públicas. Ahora bien, debe indicarse que dentro de los órganos de control se encuentran las Contralorías, quienes tienen a su cargo la vigilancia y el control fiscal, función pública especializada que tiene por objeto vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen recursos o bienes públicos.

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado en el artículo 272 de la Carta Política, el legislador expidió, para el caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la Ley 610 del año 2000, por medio de la cual se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las diferentes Contralorías. Dicha disposición legal fue modificada, en algunos aspectos particulares, por la Ley 1474 del año 2011, y por el Decreto Ley 403 de 2020.

Resulta imperativo citar el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, el cual dispone:

*“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.*

Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, afirma:

*“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene varios propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; (iii) verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado. Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja en claro que el proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del servidor público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) imputable a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un nexo causal entre ambos.*


**PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características**

*El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a saber: (i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad patrimonial que corresponde a los servidores públicos o particulares por su conducta, que tramitan los órganos de control fiscal (Contraloría General y contralorías departamentales y municipales); (ii) la responsabilidad que se declara es administrativa, porque se juzga la conducta de personas que manejan bienes o recursos públicos y que lesionan el erario, y es patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; (iii) la declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta medida, no se enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso penal o del proceso disciplinario, sino que es una responsabilidad autónoma, que apunta a resarcir un daño patrimonial; y (iv) en este proceso se debe observar las garantías sustanciales y adjetivas propias del debido proceso de manera acorde con el diseño constitucional del control fiscal (...)*

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer lugar, la supremacía de la Constitución y de la Ley como expresión de la





 CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 5 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

voluntad general frente a todos los poderes públicos, y que nos indica que la Ley es el único mecanismo de atribución de potestades a la Administración, donde el superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina dicha decisión.

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:

*"La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquella (...)"*

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 del 2000, determina que el Grado de Consulta deberá surtirse cuando concurren los siguientes casos:

- 1) **Se dicte auto de archivo.**
- 2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal.
- 3) Cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio.

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, tiene como fundamento la protección del bien jurídico relacionado con los intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuación del investigador para establecer la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles autores del mismo.


Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-840-01, estipula lo siguiente:

*"(...) Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, **causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa como culposa**. Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios. (La defensa y protección del erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las tareas públicas. Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales. (...)" (Negrilla fuera de texto)*

El artículo 4 de la Ley 610 de 2000 igualmente manifiesta que:

*"La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal.*



 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE BOYACÁ	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ</b> NIT. 891800721-8		Página	Página 6 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

*Parágrafo 1°. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad."*

Por su parte, el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 establece los elementos de la responsabilidad fiscal de la siguiente manera:

*"Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores."*

Es necesaria la existencia de los tres elementos anteriores para que exista responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño.

Ahora bien, se hace necesario entender qué es el daño patrimonial al Estado y de esta manera analizar si realmente se constituye dicho elemento; para tal fin el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 indica:

*"Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público."*

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.


Respecto a este tema, la Contraloría General de la República, mediante Concepto 80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicado que el daño patrimonial al Estado es:

*"(...) fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o económico; consiste en la pérdida de recursos por parte del Estado (...) podemos establecer que el daño patrimonial al Estado es un perjuicio material - quedando excluida la posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial. (...)"*

**VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO**

En sede de consulta y conforme al control de legalidad otorgado por el legislador, corresponde al Despacho verificar que la decisión de archivo adoptada por el Ad Quo mediante Auto No. 682 del del 06 de noviembre de 2025, respecto del proceso de responsabilidad fiscal No. 051-2021 se encuentre ajustada a derecho y conforme a los presupuestos normativos que regulan la materia en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico, de los derechos y garantías fundamentales.



 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE BOYACÁ	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ</b> NIT. 891800721-8		Página	Página 7 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

Por lo anteriormente señalado, se procede a verificar los fundamentos que orientaron la decisión tomada por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal con sustento en el artículo 47 de la Ley 610 del 2000, tras señalar que:

*“Artículo 47. Auto de archivo. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma.”*

La norma relacionada, es clara en señalar que el funcionario de conocimiento proferirá auto de archivo, cuando se pruebe que el hecho efectivamente no existió, cuando no constituye detrimento, cuando curse en el proceso una causal excluyente de responsabilidad u opere la caducidad o la prescripción dentro de la diligencia. Es decir, que el funcionario de conocimiento, se encuentra supeditado a que ocurra uno de los eventos señalados, para proferir el auto de archivo, so pena de proferir una decisión no ajustada a derecho.

Por lo anterior, debe el Despacho verificar y analizar de manera eficiente y adecuada, que la decisión adoptada en el Auto No. 682 del del 06 de noviembre de 2025, obedezca a los presupuestos normativos señalados y que, por consiguiente, el ejercicio del Control Fiscal se haya materializado en el desarrollo, impulso y decisión final del proceso.


Este despacho observa que los fundamentos jurídicos que soportan el ejercicio de la acción fiscal surgen de la competencia de la Contraloría General de Boyacá sustentada en artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, concediéndole la facultad para ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, así mismo el artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019, por el cual se reforma el régimen del Control Fiscal en Colombia, modifica el artículo 272 de la Constitución Política, señalando que: i) la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.

El señor Diego Fernando Peláez interpuso denuncia mediante correo electrónico ante esta entidad el día 26 de octubre de 2020 con radicado No. D-20-079, en la que solicita investigación por presuntas irregularidades en el contrato MG-SAMC-007-2019.

Como resultado del trámite de la Denuncia No. D-20-079 ante el Municipio de Gámeza, la Secretaría General de la Contraloría General de Boyacá, mediante informe de participación ciudadana – Auto 073 del 27 de abril de 2021, determinó un Hallazgo Fiscal por valor de **CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$112.444.393) M/CTE** (Folios 40-49).

En consecuencia, una presunta responsabilidad en cabeza de **EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.998, quien se desempeñó como alcalde del Municipio de Gámeza durante el periodo de 2016 – 2019, **ONG FUNDACIÓN BIENESTAR PARA COLOMBIA**,



 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE BOYACÁ	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ</b> NIT. 891800721-8		Página	Página 8 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

identificada con NIT N.º 900646412-9, representada legalmente por MONICA ANDREA ECHEVERRY RIOS identificada con cédula de ciudadanía No. 30.403.385 de Manizales, en calidad de contratista dentro del contrato MG-SAMC-007-2019, **LUIS ANTONIO SERRANO RINCÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.527.834, en calidad de secretario de planeación municipal de Gámeza y supervisor del contrato MG-SAMC-007-2019.

Para el Despacho, resulta imperativo verificar y analizar el material probatorio allegado al presente proceso, en donde se corroborará por medio de pruebas documentales, que los presuntos responsables fiscales realizaron todas las diligencias jurídicas y contractuales oportunas, con el fin que se ejecutara el contrato.

**Verificación probatoria:**


El Despacho se dispone a verificar el material probatorio que reposa en el expediente del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 051-2021, con el fin de surtir grado de consulta y encontrar el soporte para lo resuelto por la Dirección Operativa Responsabilidad Fiscal.

Como soporte probatorio, tenemos que en la actuación contractual se llevaron a cabo las siguientes acciones con sus respectivos comprobantes y soportes que le dan la legalidad exigida por la normatividad nacional:

**I. DOCUMENTALES:**

- Denuncia ciudadana del Contrato N.º MG-SAMC-007-2019, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES (CENTRO DÍA) DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA” (Folio 2).
- Auto N.º 167 del 13 de noviembre de 2020, proferido por la oficina de la Secretaría General (Folios 3-8)
- Diligencia de visita fiscal del 09 de marzo de 2021 (Folio 9-10).
- Certificación del origen de los recursos utilizados dentro del contrato MG-SAMC-007-2019 (Folio 11).
- Resolución N.º 002 del 02 de enero de 2012, por medio del cual se realiza nombramiento del ingeniero civil Luis Antonio Serrano Rincón, como secretario de Despacho (Folios 12-13).
- Acta de posesión del señor Luis Antonio Serrano Rincón (Folio 14).
- Declaración extra proceso (Folios 15-16).
- Contrato N.º MG-SAMC-007-2019 (Folios 18-26).
- Acta de inicio del Contrato N.º MG-SAMC-007-2019 (Folio 27).
- Adición en valor y plazo N.º 1 Contrato N.º MG-SAMC-007-2019 (Folios 28-30).
- Anexo técnico 1º Contrato N.º MG-SAMC-007-2019 (Folios 31-32).
- Acta de recibo final a satisfacción (Folio 33).
- Acta de liquidación del Contrato N.º MG-SAMC-007-2019 (Folio 34-35).
- Informe técnico N.º 026 del 27 de abril de 2021 (Folios 37-49).



	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ NIT. 891800721-8		Página	Página 9 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

**II. MAGNETICAS**

- CD que contiene los soportes de las actividades contractuales que son objeto de análisis en el presente caso.

A su vez, obra en el expediente:

- Versión libre Mónica Andrea Echeverry Ríos (Folios 81-110).

La Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales mediante informe técnico N.º 026 del 27 de abril de 2021 (Folios 37-49), expone que se determinó el presunto daño al patrimonio producto de la comparación entre las actividades contratadas y las evidencias efectivamente allegadas y verificadas de cada una de ellas; por lo anterior, a continuación se desglosará cada uno de los ítems cuestionados según el numeral con el que se identifican en el contrato y las evidencias que soportan su ejecución:

**2. COMPLEMENTOS NUTRICIONALES ALIMENTACIÓN**

- 2.01. Refrigerios para cinco (5) meses correspondientes a 2.700 unidades, con un adicional posterior de 1.400 unidades, para un total de 4.100 unidades; lo cual cuenta con soportes de entrega con la firma de recibido de cada una de las personas desde el mes de julio al mes de diciembre de 2019 evidenciables en los folios 80-110 y en el CD que obra como prueba magnetofónica en este expediente, carpeta "PROCESO GAMEZA 2019 CENTRO VIDA – HALLAZGO 1. FOLIOS 663".
- 2.02. Almuerzos para cinco (5) meses correspondientes a 6.000 unidades, con un adicional posterior de 1.100 unidades, para un total de 7.100 unidades; lo cual cuenta con soportes de entrega con la firma de recibido de cada una de las personas, evidenciables en el CD que obra como prueba magnetofónica en este expediente, carpeta "PROCESO GAMEZA 2019 CENTRO VIDA – HALLAZGO 2-3. FOLIOS 29".


**4. CELEBRACIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR**

- 4.06. Incentivos a los participantes del día del adulto mayor, correspondiente 400 unidades, lo cual cuenta con soportes de entrega con la firma de recibido de cada una de las personas; lo anterior se encuentra en el CD que obra como prueba magnetofónica en este expediente, carpeta "PROCESO GAMEZA 2019 CENTRO VIDA – HALLAZGO 4. FOLIOS 52".

**7. SALIDA RECREATIVA**

- 7.01. Salida recreativa para 130 adultos mayores, que incluye transporte, alimentación, refrigerios y póliza; con un adicional posterior para 70 personas, lo que en total serían 200 adultos mayores; lo cual cuenta con soportes de entrega con la firma de recibido de cada una de las



 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE BOYACÁ	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ</b> NIT. 891800721-8		Página	Página 10 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

personas y facturas, evidenciables en el CD que obra como prueba magnetofónica en este expediente, carpeta “PROCESO GAMEZA 2019 CENTRO VIDA – HALLAZGO 5. FOLIOS 22”.

3. TALLER PRODUCTIVO

- 3.01. Proyecto productivo en tejidos que incluye materiales e instructor para su realización, se allega evidencia fotográfica y facturas que constatan la ejecución de la actividad entre los meses de julio y octubre de 2019; lo cual se encuentra en el CD que obra como prueba magnetofónica en este expediente, carpeta “PROCESO GAMEZA 2019 CENTRO VIDA – HALLAZGO 6. FOLIOS 16”.
- 3.02. Proyecto productivo huerta orgánica casera y vivero de plantas ornamentales y aromáticas, lo cual cuenta con facturas, acta de entrega de empalme del Centro Vida y evidencia fotográfica de la ejecución de la actividad; lo anterior obra como prueba magnetofónica en este expediente, carpeta “PROCESO GAMEZA 2019 CENTRO VIDA – HALLAZGO 11. FOLIOS 25”.

2. CONMEMORACIÓN DÍA BLANCO

- 2.01. Almuerzo para 80 personas en el día blanco, lo cual cuenta con soportes de entrega con la firma de cada beneficiario, evidenciables en el CD que obra como prueba magnetofónica en este expediente, carpeta “PROCESO GAMEZA 2019 CENTRO VIDA – HALLAZGO 7. FOLIOS 6”.
- 2.02. Incentivos para personas en condición de discapacidad para 80 personas, lo cual cuenta con soportes de entrega con la firma de recibido de cada una de las personas; evidenciables en el CD que obra como prueba magnetofónica en este expediente, carpeta “PROCESO GAMEZA 2019 CENTRO VIDA – HALLAZGO 8. FOLIOS 6”.


3. PROYECTO PRODUCTIVO Y TRABAJO ASOCIATIVO

- 3.01. Apoyo logístico en proyecto asociativo sala de velación, para lo cual se evidencia registro fotográfico de la Sala de Velación en óptimas condiciones y con la adecuación requerida y relación de facturas que prueban la inversión de los recursos; evidenciables en el CD que obra como prueba magnetofónica en este expediente, carpeta “PROCESO GAMEZA 2019 CENTRO VIDA – HALLAZGO 9. FOLIOS 7”.

CELEBRACIÓN FIN DE AÑO ADULTOS MAYORES

- Celebración de cena navideña para 280 personas, lo cual se evidencia en soportes de entrega con la firma de recibido de cada una de las personas; lo anterior se encuentra en el CD que obra como prueba magnetofónica en este expediente, carpeta “PROCESO GAMEZA 2019 CENTRO VIDA – HALLAZGO 10. FOLIOS 24”.



 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE BOYACÁ	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ</b> NIT. 891800721-8		Página	Página 11 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

Conforme a lo expuesto, para el Despacho resulta claro que la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal actuó en hecho y en derecho al determinar que existe evidencia documental suficiente que acredita el cumplimiento del objeto contractual y la realización de todas las actividades pactadas; en consecuencia, el presunto daño observado mediante la denuncia y posterior informe de la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, no se materializó.

Aunque inicialmente se identificó un faltante de soportes, en la presente investigación se demostró la ejecución total del contrato, quedando sin sustento el hallazgo planteado en el informe de auditoría.

Del análisis efectuado por la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá y del acervo probatorio obrante en el expediente, se concluye que no existen elementos que permitan configurar responsabilidad fiscal ni daño patrimonial alguno. La verificación ítem por ítem acredita la ejecución completa de lo contratado y el recibo final a satisfacción.

En consecuencia, se establece que los presuntos responsables adelantaron las diligencias jurídicas y contractuales necesarias y acordes con el objeto del contrato. Por tanto, el daño patrimonial resulta inexistente y no hay fundamento para continuar con la presente actuación, asistiéndole razón a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal para decretar el archivo.


Lo anterior se fundamenta en que la conducta de los implicados no generó ni consolidó afectación alguna al erario del municipio de Gámeza, por lo cual no se materializó el elemento esencial de la responsabilidad fiscal relativo al nexo causal (artículo 5 de la Ley 610 de 2000). Ello obedece a que no basta con la existencia de un riesgo dentro de la cadena causal, sino que se requiere que el actuar sea determinante en la producción del daño patrimonial, situación que no se acreditó.

Por lo tanto, se determina que no existe nexo causal entre el actuar de los presuntos responsables y un daño patrimonial, conforme al material probatorio que evidencia la ejecución total y correcta del contrato.

En síntesis, para que el daño patrimonial al Estado sea indemnizable debe ser cierto, cuantificable, anormal, actual y real, plenamente demostrado y no basado en hipótesis o suposiciones; tales requisitos no se cumplieron, pues no se acreditó un menoscabo a los recursos del municipio de Gámeza derivado de una gestión fiscal ineficiente.

Con fundamento en el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, la responsabilidad fiscal es de carácter subjetivo, de modo que requiere establecer si el investigado obró con dolo o culpa grave. Al no evidenciarse conducta alguna que pusiera en riesgo el patrimonio público, no puede configurarse la presunción legal de culpa grave o dolo; solo procede cuando tales elementos sean manifiestos, lo que no ocurrió. Por el contrario, se demostró que los implicados realizaron las actuaciones legales, técnicas y jurídicas necesarias para la adecuada ejecución del contrato.



 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE BOYACÁ	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ</b> NIT. 891800721-8		Página	Página 12 de 12
	Macroproceso	APOYO	Código	GJ-F-RE-01
	Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	01
	Formato	RESOLUCIÓN	Vigencia	23/11/2021

Del análisis de las pruebas obrantes en el expediente y en sede de consulta, se evidenció que no existió omisión o extralimitación en el desarrollo del contrato, ni un nexo determinante que generara detrimento patrimonial al municipio de Gámeza. Se constató una gestión idónea en la materialización del contrato, sin configurarse los elementos de la responsabilidad fiscal ni una gestión fiscal ineficiente o ineficaz, conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000.

El Despacho concluye, de manera razonada y conforme al derecho, que le asiste razón al A quo —Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal— en el Auto que ordenó el archivo, pues el material probatorio confirmó el cumplimiento de la actuación contractual.

Con base en las pruebas examinadas, se establece que no se cumplen los presupuestos de la Ley 610 de 2000 para atribuir responsabilidad fiscal, razón por la cual procede confirmar en sede de Consulta el Auto de Archivo emitido por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, al no demostrarse la existencia de un detrimento patrimonial ni de una gestión fiscal ineficiente.

El material probatorio conduce a una certeza jurídica que demuestra que la decisión de proferir Auto de archivo por parte de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal conforme al artículo 47 de la Ley 610 de 2000, estuvo ajustada fáctica y jurídicamente; por lo cual, el Despacho del señor Contralor General de Boyacá.

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: TENER** por surtido en Grado de Consulta el expediente No. No 051-2021/ MUNICIPIO DE GÁMEZA.

**ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR** la decisión contenida en el Auto No. 682 del del 06 de noviembre de 2025, en atención a que se garantice la defensa del patrimonio público, el interés público, los derechos y garantías fundamentales; y conforme a la parte motiva.

**ARTÍCULO TERCERO: REMITIR** el expediente a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, para lo de su competencia.

**ARTÍCULO CUARTO: NOTIFIQUESE** esta resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 del 2011.

**ARTÍCULO QUINTO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**ARTÍCULO SEXTO:** Contra esta Resolución no procede ningún recurso.

**PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**JUAN PABLO CAMARGO GÓMEZ,**  
Contralor General de Boyacá